ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

16^{ta.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 186

10 de julio de 2009

Presentada por el señor *Fas Alzamora*

Referida a las Comisiones de Educación y Asuntos de la Familia; de Bienestar Social; y de Hacienda

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para decretar un “Estado de Emergencia Social en Puerto Rico” y ordenar al Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a crear un “Consejo Especial Para Atender la Crisis Social en Puerto Rico”, que tendrá la encomienda de elaborar un Plan de Desarrollo Social de consenso y que contenga iniciativas a corto, mediano y largo plazo, que establezca acciones con carácter de urgencia para atender ciertos problemas sociales que se han visto agudizados en los últimos años y por la crisis económica; y que identifique las áreas y los sectores poblacionales en los cuales se deben tomar medidas de carácter social y de manera urgente, brindándole especial énfasis a identificar iniciativas para proteger a los siguientes sectores de la población: los menores, los envejecientes, los deambulantes y las víctimas de violencia doméstica; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los países constantemente están enfrentando retos para lograr un desarrollo económico óptimo. Por ello, a menudo las estadísticas que reflejan las tasas de crecimiento económico son motivo de discusión y de análisis por las administraciones de turno de los gobiernos alrededor del mundo.

Sin lugar a dudas el desarrollo económico de un país es y debe ser tema que ocupe una parte significativa de la gestión gubernamental. No obstante, el fin ulterior de toda administración gubernamental debe ser lograr el bienestar común, y sobre todo atender a las clases marginadas y débiles, aún en momentos de crisis económica. De hecho es en momentos en

los cuales los ciclos de actividad económica se tornan lentos que los países deben reforzar sus planes sociales para atender a los sectores más desprotegidos.

Por otro lado, el desarrollo de un país, para ser considerado apropiado, debe siempre propender a buscar elevar la calidad de vida de todos. Es innegable que cualquier intento para establecer nuevos derroteros que guíen a un país hacia un desarrollo económico sostenible va intrínsecamente relacionado con el área social. Además para poseer un desarrollo económico adecuado es necesario tener: una sociedad emocionalmente estable, esfuerzos dirigidos a minimizar lo más posible los patrones de violencia, desarrollar una cultura de paz y convivencia que promueva la protección, por todos, de los más desvalidos.

Es innegable que la isla de Puerto Rico atraviesa por momentos de retos en el aspecto económico y social. No obstante, por años las administraciones de turno han tratado de atender distintas problemáticas de índole social. Es palpable como la desintegración familiar, la violencia doméstica, el maltrato a los menores y a los envejecientes, el alza en los asesinatos, entre otros, son problemas que han pretendido ser atendidos por sinnúmero de personas y gobiernos, generándose varios planes y legislación a través de décadas para atenderlos. No obstante, cada uno de los anteriores problemas son en su esencia modalidades de la violencia y una gran mayoría tiene su génesis en el entorno familiar.

Al día de hoy nuestro país no ha podido viabilizar una meta social compartida por todos o por una gran mayoría de todos los sectores que componen la sociedad puertorriqueña. Una meta social que más que repudiar la violencia y atender cada problema social por separado, posea iniciativas bajo un plan construido por todos y que atienda todas las áreas de manera integrada. Hace falta darle más coherencia y coordinación a ciertas iniciativas ya encaminadas, cambiar algunas y establecer nuevas.

Por ello, dejando atrás actitudes pesimistas que no conducen a nada hay que reconocer que la atención de los problemas sociales que enfrenta la isla no puede ser disminuida a discusiones de índole político. Es importante destacar que pese a los esfuerzos genuinos realizados por administraciones de turno, las estadísticas revelan que el abuso físico, sexual y emocional infantil aún es una problemática en la isla. Por lo tanto, es evidente que queda mucho por hacer en dicha área y que urge actuar de inmediato.

Además, recientemente la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada reveló la existencia de aproximadamente 30,000 querellas sobre abuso y maltrato de

envejecientes, denunciado que se estima un alza en los casos de maltrato de dicha población. Cabe destacar que un estudio reciente, y efectuado por dicha Oficina, demuestra que el 43.6% de las personas de 65 años o más en la isla se encontraban bajo los niveles de pobreza en el año 2006. Entre los retos que enfrentan nuestros envejecientes se encuentran los altos costos de los medicamentos, la carencia de adecuados servicios de cuidados en el hogar, entre otros, e inclusive carencia de recursos para adquirir los productos básicos de la canasta de alimentos. A ello se suma el hecho de que a menudo un grupo significativo de dicha población sufre de maltrato familiar e institucional.

Por otro lado, aún en Puerto Rico el problema de la violencia doméstica sigue impactando a miles y miles de familias puertorriqueñas. Ello a pesar de que varias administraciones de turno han trabajado con el fin de promulgar leyes y establecer políticas públicas dirigidas a proteger el grupo poblacional que mayormente se ve impactado por este tipo de violencia. Anualmente miles de mujeres solicitan órdenes de protección y recurren a remedios en el área criminal para responder al maltrato que reciben de sus parejas. Decenas de mujeres mueren anualmente a manos de sus parejas al extremo de que la violencia doméstica es la primera causa de muerte violenta en la población femenina de Puerto Rico.

Los aspectos antes expuestos cobran mayor pertinencia hoy día ante la recesión económica que atraviesa el país y sin número de países alrededor del mundo. Es innegable que a tenor con lo anterior se debe coordinar un proyecto de país que esté avalado por distintos sectores puertorriqueños, que integre el “expertise” de los grupos académicos con dominio de los principales problemas sociales que aquejan al país y que posea el compromiso de los principales partidos políticos y de las tres ramas de Gobierno. Es necesario crear el mecanismo y punto de convergencia para que dichos sectores elaboren el proyecto social y reconocer que el mismo debe contener iniciativas para abordar con carácter de urgencia ciertos problemas de índole social, reconociendo la existencia en el país de una crisis social. Hoy más que nunca el desarrollo de un plan social (de consenso) toma pertinencia.

A su vez, en momentos de crisis económica, las medidas que los gobiernos implantan para enfrentarla son cruciales pues dependiendo de las mismas el desarrollo social de un pueblo puede mejorar o por el contrario puede verse seriamente afectado. Por ello, la forma y manera mediante la cual los gobiernos de los países deciden atender sus asuntos fiscales y el área

económica tendrá grandes repercusiones en asuntos sociales tales como: desempleo, pobreza, salud mental, drogadicción, deambulantes, entre otros.

Es pertinente señalar que la presente administración ha adoptado una serie de medidas para atender asuntos fiscales del Gobierno. Para ello conformó el Consejo Asesor de Reconstrucción y Fiscal (CAREF) con el fin de que rindiera un informe que contuviera medidas para atender de inmediato lo que el Gobierno actual ha denominado como una “crisis fiscal”. Cabe destacar que efectivo el 8 de enero de 2009, la presente Administración promulgó, mediante Boletín Administrativo Número OE-2009-001, la Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el fin de decretar un Estado de Emergencia Fiscal e implantar medidas iniciales de control fiscal y reconstrucción económica. No obstante, se ha perdido de perspectiva que todos los factores que se señalan característicos de una recesión económica, así como las medidas que se tomen para enfrentar lo que el presente Gobierno ha denominado una “crisis fiscal”, también tienen profundas repercusiones en sinnúmero de áreas que trascienden el ejercicio técnico y especializado de realizar un cuadro fiscal o la toma de medidas para que el Gobierno de Puerto Rico pueda cumplir con sus obligaciones ante los bonistas.

Aunque ciertamente los diversos problemas sociales por los cuales atraviesa el país tienen su génesis en profundas y diversas causas que provienen de años y están relacionadas con el entorno familiar, no es menos cierto que ante una recesión económica y ante las medidas que se tomen para enfrentar los asuntos fiscales del país, dichos problemas se agudizan e impactan con mayor fuerza a miles y miles de ciudadanos de la isla. En momentos de crisis económica los problemas de carácter social en los países se agudizan y además se puede prever un aumento en la incidencia de ciertos delitos y de los problemas sociales. Ello sin contar el efecto devastador que tiene en la salud mental de los ciudadanos los problemas económicos.

Además, en estos últimos meses han ocurrido sucesos que han evidenciado la importancia que el Gobierno posea un plan de emergencia social para atender las áreas y los ciudadanos que se han visto impactados por este periodo de recesión económica. Por ello cualquier decreto por parte de la presente administración con miras a establecer un estado de emergencia fiscal en el país, por consiguiente tiene que venir acompañado de un plan de emergencia para atender el área social.

Por ello esta Asamblea Legislativa estima urgente y pertinente ordenar a la Rama Ejecutiva a decretar una “Emergencia Social” en la isla, conformar un **Consejo Especial para Atender la Crisis Social**, de manera que el mismo conforme un Plan de Desarrollo Social y que rinda un informe que contenga un plan de acción de iniciativas que deben atender a corto, mediano y largo plazo la crisis social, en especial la población de envejecientes, de menores, mujeres víctimas de violencia domésticas y deambulantes. Dicho plan debe ser uno que contenga la coordinación de todas las agencias gubernamentales con inherencia en estos asuntos, así como la colaboración e iniciativas que tendrá que realizar la Rama Judicial y la Rama Legislativa para implementar dicho plan, así como otros sectores.

El Consejo, dentro del Plan de Desarrollo Social a elaborarse, tendrá la encomienda de realizar un estudio de los problemas sociales que se han agudizado a través de las últimas décadas en Puerto Rico, así como por la actual recesión económica, evaluar el impacto de las medidas de control fiscal adoptadas por el Gobierno en los diferentes sectores del país. Dicho ente deberá estar conformado por representación de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como representación del sector privado, entre otros.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se decreta un “Estado de Emergencia Social en Puerto Rico”.
- 2 Sección 2.- Se ordena al Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado
- 3 de Puerto Rico, tomar el liderato y conformar un “Consejo Especial Para Atender la Crisis
- 4 Social en Puerto Rico”, compuesto por los siguientes funcionarios gubernamentales y
- 5 representantes del sector privado:
 - 6 1. El/La Secretario(a) de la Familia, (quién presidirá el Consejo)
 - 7 2. El/La Secretario(a) de Educación
 - 8 3. El/La Secretario(a) de Salud
 - 9 4. El/La Superintendente de la Policía de Puerto Rico
 - 10 5. El/La Presidente(a) del Senado de Puerto Rico
 - 11 6. El/La Presidente (a) de la Cámara de Representantes de Puerto Rico

- 1 7. Un(a) Senador(a) del Partido de Minoría
- 2 8. Un(a) Representante a la Cámara del Partido de Minoría
- 3 9. Un(a) representante del sector laboral
- 4 10. Un(a) ciudadano(a) y profesional con “expertise” en el área social.
- 5 11. Un(a) ciudadano(a) y profesional con “expertise” en salud mental
- 6 12. Tres representantes del sector académico con amplio conocimiento en
- 7 asuntos sociales.
- 8 13. El/La Directora(a) Administrativo(a) de la Oficina de Administración
- 9 de los Tribunales
- 10 14. Cuatro representantes de entidades sin fines de lucro, de base
- 11 comunitaria, que se dediquen a proveer asistencia a los siguientes
- 12 sectores de la población: menores de edad, envejecientes,
- 13 deambulantes y víctimas de violencia doméstica.
- 14 15. Un(a) Alcalde(sa) miembro de la Federación de Alcaldes de Puerto
- 15 Rico
- 16 16. Un(a) Alcalde(sa) miembro de la Asociación de Alcaldes de Puerto
- 17 Rico

18 Sección 3.- Dicho Consejo tendrá la encomienda de elaborar un Plan de
19 Desarrollo Social, de consenso, que contenga iniciativas a corto, mediano y a largo plazo,
20 que establezca acciones con carácter de urgencia para atender los problemas sociales que
21 se han visto agudizados en las últimas décadas en Puerto Rico y por la actual crisis
22 económica; y que identifique las áreas y los sectores poblacionales en los cuales se deben
23 tomar medidas de carácter social y de manera urgente, brindándole especial énfasis a

1 identificar iniciativas para proteger a los siguientes sectores de la población: los menores,
2 los envejecientes, los deambulantes y las víctimas de violencia doméstica. El Plan de
3 Desarrollo Social deberá contener iniciativas para implantarse a largo plazo a los fines de
4 instituir políticas públicas perdurables.

5 Sección 4.- Dicho Consejo deberá además realizar un análisis de las medidas
6 fiscales implantadas por el Gobierno y el impacto social de las mismas; deberá efectuar
7 un análisis de las áreas y los sectores poblacionales que se han visto impactados por la
8 crisis económica que enfrenta la isla, y deberá formular las iniciativas y las medidas, a ser
9 incluidas en el Plan de Desarrollo Social para atender las poblaciones que se verán
10 adversamente afectadas. Dicho plan contendrá las fases que deberán completarse para
11 implantar dichas iniciativas a corto plazo.

12 Sección 5.- Se dispone además, para que el Departamento de la Familia integre en
13 los trabajos del Consejo las Juntas, los Comités, y entes creados administrativamente o
14 mediante legislación para atender y brindar asesoramiento en asuntos de índole social, o
15 que hayan sido conformados para establecer lineamientos y acciones dirigidas a abordar
16 los problemas sociales del país.

17 Sección 6.- Se ordena al Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado
18 proveer de sus recursos presupuestarios los fondos necesarios para la operación del
19 Consejo; y establecer los procesos y promulgar la reglamentación necesaria para
20 conformar dicho Consejo, el cual deberá crearse no más tarde de cuatro semanas, luego de
21 aprobada la presente Resolución.

1 Sección 7.- Dicho Consejo deberá rendir un informe a la Asamblea Legislativa de
2 Puerto Rico y al Gobernador de Puerto Rico, conteniendo sus hallazgos, conclusiones y
3 recomendaciones no más tarde del 15 de diciembre de 2009.

4 Sección 8. El Consejo Especial Para Atender la Crisis Social en Puerto Rico
5 terminará sus funciones seis (6) meses después de remitido el informe a la Asamblea
6 Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico.

7 Sección 9.- Esta Resolución empezará a regir inmediatamente, después de su
8 aprobación.